



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05360-31-05-002-2017-00005-03 (O2-23-182)
Demandante: CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO
Demandadas: COLFONDOS S.A., MISIÓN EMPRESARIAL S.A., WASH S.A., JRCIA y JNCI.
Llamada en garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO en contra de la AFP COLFONDOS S.A., MISIÓN EMPRESARIAL S.A., WASH S.A., JRCIA y JNCI; donde se integró como llamada en garantía a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. conocido bajo el radicado único nacional 05360-31-05-002-2017-00005-03 (O2-23-182), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la sociedad AFP COLFONDOS S.A., en contra de la decisión adoptada el 23 de junio de 2023, y mediante la cual el juzgador de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

El señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO, actuando por intermedio de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en procura de que se declare la existencia de una relación laboral con la sociedad Misión Empresarial S.A. bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido a partir del 1° de febrero de 2010 como trabajador en misión de WASH S.A.S., y en consecuencia, deprecia el reconocimiento de las

acreencias sociales adeudadas, junto con la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, como sanción moratoria por la no consignación de las cesantías a un fondo, sanción por el no pago de los intereses a las cesantías y el pago de los auxilios económicos por incapacidad. De igual manera, petitionó el reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo de la AFP COLFONDOS S.A. junto con la nulidad de los dictámenes emitidos por las entidades calificadoras; controversia que se dirimió en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, el 26 de agosto de 2019 (pág.1302, doc.01, carp.01), el que dispuso la prestación pensional a cargo de la sociedad AFP COLFONDOS S.A. a partir del 14 de diciembre de 2016, a la vez de gravarla en costas en la suma de siete (7) SMLMV, a favor del demandante; sentencia que fue confirmada por esta Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 13 de julio de 2020 (págs.1323 a 1336, doc.01, carp.02), con la que se infligió condena en costas a la sociedad recurrente COLFONDOS S.A. en la suma equivalente a un (1) SMLMV para el año 2020, vale decir, la suma de \$ 877.803.

De manera similar, subraya la Sala que en el diligenciamiento judicial, el juez de primer grado el 06 de julio de 2018 (págs.1181 a 1185, doc.01, carp.01), en las etapas de que trata el artículo 77 del estatuto instrumental del trabajo, declaró no probados los hechos sustento de la excepción previa denominada “*no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*” propuesta por la AFP COLFONDOS, imponiéndole a su cargo el valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el 2018 a título de costas; decisión que fue confirmada por esta Corporación en proveído del 15 de noviembre de esa misma anualidad, cuantificando la condena en costas en una suma igual a 1/6 del SMLMV, esto es, la suma de \$ 130.207 (págs.1192 a 1193, doc.01, carp.01).

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, en fecha 23 de junio de 2023 (doc.02, carp.01) emitió auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron por valor de \$ 10.288.010, por concepto de agencias en derecho, discriminadas de la siguiente manera: a cargo del ente societario COLFONDOS S.A. y a favor del señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO, la suma de \$ 9.280.000(guarismo que resulta de la sumatoria de las sumas de \$ 1.160.000 y \$ 8.120.000), por la primera instancia, y \$ 1.008.010 (valor que se obtiene de sumar las siguientes cantidades \$ 130.207 y \$ 877.803) por la segunda instancia; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, la apoderada judicial de la AFP del RAIS (doc.04, carp.01), interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación, solicitando se modifique el valor de las costas tasadas en primera instancia, como quiera que a su juicio el valor de las costas debe comprender las sumas de \$ 8.120.000 y \$ 877.803, por concepto de condena en costas de primera y segunda instancia, esto es, debe tasarse en la suma total de \$ 8.997.803. Ello así, cuestiona los valores adicionales de \$ 1.160.000 y \$ 130.207 que le fueran impuestos por la *a quo* desconociendo su causación. Sumó a lo anterior, la necesidad de disminuir el valor de las costas calculado en ambas instancias, aduciendo que *“... el Despacho, al momento de fijar las agencias en derecho, a cargo de Colfondos S.A. y en favor de la parte demandante, no tuvo en cuenta los principios de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad, que prescribe la Corte Constitucional, pues las mismas debieron ser mucho inferior a lo ordenado por el Despacho, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon el litigio, y la gestión de la apoderada de esta entidad, en relación con el proceso”*.

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 04 de agosto hogaño (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual la censura se reiteró en los argumentos sustento de los yerros señalados en el recurso de alzada (doc.03, carp.02).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto sustantivo de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO en contra de la de la AFP COLFONDOS S.A., MISIÓN EMPRESARIAL S.A., WASH S.A., JRCIA y JNCI; donde se integró como llamada en garantía a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., se ajusta a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala modificará la decisión de primer grado, con el argumento basilar de que las agencias en derecho clara, evidente y lógicamente se impusieron por la *a quo* en contra de la AFP COLFONDOS S.A. y a favor del demandante en unidades de valor en SMLMV que superan el tope establecido para su cuantificación, confirmando en lo demás de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación relieves las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para

la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP.

Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

“ARTICULO 5º. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:

- | | |
|-----------------------------|--|
| <i>En única instancia</i> | <i>a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.</i> |
| | <i>b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.</i> |
| <i>En primera instancia</i> | <i>a. Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario</i> |
| | <i>(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido</i> |
| | <i>(ii) De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.</i> |
| | <i>b. Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.</i> |
| <i>En segunda instancia</i> | <i>Entre 1 y 6 smlmv”.</i> |

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario, corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

Es meridiano entonces apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un

monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté sujeto a fijar como agencias el máximo referenciado.

En síntesis y de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia en decisión STC3869 de 2020, la fijación de las agencias en derecho debe seguir los lineamientos o parámetros que a continuación se enuncian: “... (i) *deben motivarse y determinarse en la respectiva actuación que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de única o primera instancia, las incluirá en la liquidación de las costas; y de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado hará un control de legalidad mediante auto susceptible de reposición y de apelación según corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidación*”.

Revisado el expediente, la Sala advierte que en proveídos del 06 de julio de 2018 (págs.1181 a 1185, doc.01, carp.01), en las etapas de que trata el artículo 77 del estatuto instrumental del trabajo, declaró no probados los hechos sustento de la excepción previa de “*no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*” propuesta por la AFP COLFONDOS, imponiéndole a su cargo el valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el 2018 a título de costas; decisión que fue confirmada por esta Corporación en proveído del 15 de noviembre de esa misma anualidad, cuantificando la condena en costas en una suma igual a 1/6 del SMLMV, esto es, la suma de \$ 130.207 (págs.1192 a 1193, doc.01, carp.01); y así, debiendo integrar estos guarismos a la liquidación de costas que está llamada a aprobar el juez de primer nivel de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del CGP, el cual establece que “[l]as costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior”; cálculo en el que se encuentra inmersa, entre otras, “... la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso”.

Las anteriores disposiciones normativas explican la necesidad de incluir, además de las agencias en derecho tasadas en la decisión que ponga fin a la primera y segunda instancia, la condena en costas en las etapas precluidas en instancias procesales

anteriores, como lo es, la decisión de excepciones previas. Ello así, no deviene en equivocada la decisión de la juzgadora de primer grado, en tanto avaló la inclusión de las agencias en derecho que se causaron en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS en la liquidación concentrada que de las costas y demás expensas fuera efectuada por la secretaría.

Sentado lo anterior, observa la Sala que, el opugnador en el segundo segmento del embate inaugural, critica el valor de 7 SMLMV en que se ponderaron las agencias en derecho, considerando que dicha cantidad no responde a los principios de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad de que trata el artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

Ello así, y de cara a los reproches planteados por la censura, en el *sub lite* se observa que la demanda versó en derredor del pago de las acreencias sociales e indemnizaciones que presuntamente adeudaban las sociedades WASH S.A. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., como también del reconocimiento de la pensión por invalidez a favor del señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO y a cargo de la AFP COLFONDOS S.A. (págs.08 a 20, doc.01, carp.02); resultando avante únicamente este último pedimento.

De esta manera, la funcionaria judicial de primer grado estimó que al señor HURTADO LONDOÑO le asistía derecho al derecho prestacional a partir del 14 de diciembre de 2016, en cuantía inicial de un (1) SMLMV, fijando el retroactivo pensional causado desde esa data y hasta el 31 de julio de 2019 en la suma de \$ 26.554.479, y siendo ello así, se trasluce para la Sala la irrazonabilidad de las agencias en derecho fijadas en la primera instancia en la suma de siete (7) SMLMV para el año 2019, vale decir, el valor de \$ 5.796.812; pues dicha cifra corresponde aproximadamente al 21,83% de la condena impuesta por la *a quo* [$(\$ 26.554.479 \times 21,83 = \$ 579.684.276) \mid (\$ 579.684.276 / 100 = \$ 5.796.842)$], desbordando en exceso el rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por el Acuerdo PSAA16-10554 referido, y que ondean entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.

Así las cosas, de lo que viene de decirse, para la Sala refulge palmar el protuberante error en que incurrió el juzgado de instancia en el auto del 23 de junio de 2023 (doc.02, carp.01), por abierta infracción de los artículos 361, 365 y 366 del CGP al apartarse injustificadamente del marco y tarifas establecidas en la disposiciones normativas explicitadas con suficiencia; imprecisión que, la juez singular ni siquiera estuvo presta de corregirlo en el proveído del 05 de julio de la presente anualidad (doc.07, carp.01), por

manera que no queda otra vía para esta Corporación que modificar el primero de los proveídos en cita, únicamente respecto del valor de las agencias en derecho fijadas para la primera instancia en favor del señor CARLOS MARIO LONDOÑO HURTADO y a cargo de la AFP COLFONDOS S.A., en cuantía de \$ 1.858.813, equivalente al 7% de lo aquí pretendido; fijándose entonces el valor global de las costas en primera instancia en la suma total y única de \$ 2.640.055 (valor que resulta de sumar las cantidades de \$ 781.242 y \$ 1.858.313, por concepto de agencias en derecho fijadas en las resultas de la excepción previa propuesta y en la sentencia, respectivamente).

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el auto objeto de apelación proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí el 23 de junio de 2023, únicamente respecto al valor de las agencias en derecho fijadas a favor del señor CARLOS MARIO HURTADO LONDOÑO y a cargo de la AFP COLFONDOS S.A. en la primera instancia, para fijarlas en la suma total y única de \$ 2.640.055, según y conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

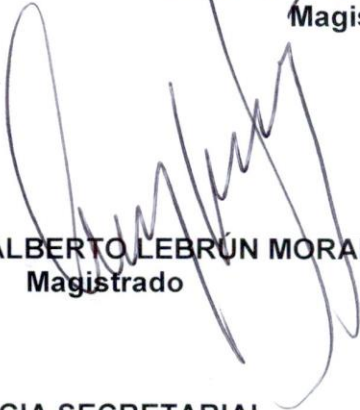
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto que se revisa por vía de apelación, por las razones que da cuenta la parte motiva de este proveído.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

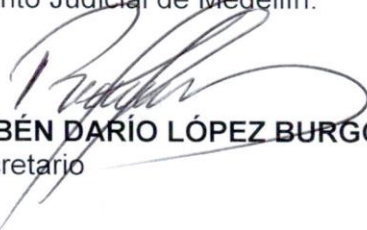
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS No. 151**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy **31 de agosto de 2023** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario